

Auto del Tribunal Constitucional 382/1996, de 18 de diciembre, de inadmisión de recurso de amparo

I. ANTECEDENTES

1. Mediante escrito presentado ante el Juzgado de Guardia el 16 de febrero de 1996 y registrado en este Tribunal el 19 de febrero, don Aquiles Ullrich Dotti, procurador de los Tribunales y de don Bernardo García-Tuñón Aza y doña Elena Urresti Barandiarán, que intervienen en su propio nombre y simultáneamente en representación de su hijo menor, don Alejandro Francisco García-Tuñón Urresti, interpuso recurso de amparo contra el auto del Tribunal Supremo, de 23 de enero de 1996, que inadmitió recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, de 19 de diciembre de 1994, recaída en el rollo núm. 702/1994 dimanante del auto núm. 196/1994 del Juzgado de Primera Instancia, núm. 5, de Oviedo.

2. Los hechos en que se fundamenta la demanda son, en resumen, los que siguen:

a) Desde el año 1988, el menor Alejandro Francisco García-Tuñón Urresti venía cursando la Educación General Básica en el "Colegio los Robles", centro privado no concertado que explota la compañía Mercantil "Fomento de Centros de Enseñanza, S.A.", en el que sus padres acordaron inscribirlo por entender que su ideario era el más adecuado para su formación y educación integrales.

b) En el mes de marzo de 1994, recibieron una comunicación de la dirección del colegio en la que se les comunicaba la expulsión de su hijo con base en lo dispuesto en el art. 26.3 d) del Real Decreto 1543/1988, regulador de los derechos y deberes de los alumnos. Por tal motivo, promovieron juicio ordinario de menor cuantía en el que acumularon el ejercicio de la acción tendente

al restablecimiento del derecho fundamental a la libertad de enseñanza y, subsidiariamente, acción de impugnación de resolución unilateral del contrato de enseñanza, solicitando para ambos supuestos la pertinente indemnización.

c) Con fecha 1 de septiembre de 1994, recayó sentencia desestimatoria del Juzgado de Primera Instancia, núm. 5, de Oviedo en la que, por lo que a este amparo concierne, se argumentó lo siguiente en relación con la primera de las acciones indicadas: de una parte, que no se había lesionado el derecho garantizado en el art. 27.1 CE, "puesto que una cosa es tener derecho a la educación y otra muy distinta el derecho a recibir educación en un determinado centro, el derecho a la educación no fue vulnerado y el propio alumno continuó el curso en otro colegio designado por las autoridades competentes, cumpliéndose con ello el mandato constitucional"; y, de otro lado, en lo tocante al derecho ex art. 27.3 CE, tampoco se apreció vulneración alguna, "pues la expulsión no le priva de recibir la formación religiosa y moral de acuerdo con las convicciones de los padres" (fundamento jurídico 2). Y, en lo concerniente a la segunda acción, basada en el incumplimiento de las obligaciones de la entidad demandada al resolver el contrato de arrendamiento de servicios, el órgano judicial, ante "la falta de jurisprudencia sobre la materia" optó por fundamentar su decisión en la recaída sobre otros contratos también regidos por la confianza, como sucede en determinadas sociedades. Así, pues, en aplicación de los criterios establecidos en la jurisprudencia constitucional en materia de derecho de asociación (SSTC 218/1988 y 96/1994), el juzgado llegó a la conclusión de que nada había que objetar a la sanción impuesta, ya que ésta tenía una base razonable y se cumplieron los requisitos formales legalmente exigibles para su imposición, a saber, incoación de un expediente, nombramiento de instructores, práctica de pruebas y audiencia del menor (fundamento de derecho 3).

d) Recurrida en apelación esta resolución, la Audiencia Provincial de Oviedo dictó sentencia desestimatoria el 19 de diciembre de 1994. Con ella, tras indicarse que todas las incidencias del expediente sancionador están reservadas al conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa por aplicación del Real Decreto 1543/1988, se rechazó en su fundamento de derecho 2 la pretendida lesión de derechos fundamentales de este modo: "En cuanto al ejercicio del derecho a la educación y el disfrute de la libertad de enseñanza resulta claro que el mismo no es absoluto, sino que está sujeto a ciertos límites positivos y negativos, dada la inexistencia de derechos absolutos e ilimitados, a fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás miembros de la comunidad educativa, de tal modo que el derecho del alumno a recibir la formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad, de acuerdo con sus propias convicciones y las de su familia, debe compatibilizarse con el respeto del derecho al estudio de sus compañeros asumiendo las normas de convivencia dentro del centro docente, lo que constituye un deber de los alumnos. La infracción del citado deber por la comisión de una conducta tipificada como muy grave, produce el resultado de privar al alumno del derecho a recibir educación en el concreto centro, sin

que se merme con esa medida su derecho a la escolaridad en el caso de educación básica obligatoria, facultando al centro docente para rescindir unilateralmente el contrato por causa justificada al frustrarse el fin del mismo para la parte que cumple y por razón del incumplimiento obstativo de la contraria."

e) Finalmente, se interpuso recurso de casación, que sería inadmitido por el Tribunal Supremo, mediante auto de 23 de enero de 1996, al estimar que el mismo carecía manifiestamente de fundamento (regla 3.ª del art. 1710.1 LEC).

3. En la demanda se alega, en primer término, que el auto del Tribunal Supremo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), puesto que, además de adolecer de falta de motivación, se trata de una resolución arbitraria e infundada.

De otra parte, se imputa a dicha resolución la lesión del derecho a la educación del niño (art. 27.1 CE), pues éste abarca no sólo la facultad de elegir un determinado centro sino también la de continuar en el mismo, así como la del derecho de los padres a dar a sus hijos una formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones (art. 27.3 CE). Se sostiene a este respecto en la demanda que se ha ignorado la doctrina vertida en la STC 159/1986, según la cual tanto las normas que regulan el derecho fundamental como las que establecen límites a su ejercicio vienen a ser igualmente vinculantes y actúan recíprocamente, de tal modo que la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe la eficacia de las normas limitadoras, debiendo, por ende, éstas interpretarse en el sentido más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales. Pues bien, en este supuesto la norma limitadora era el art. 6.2 de la Ley Orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la educación, que establece como un deber básico de los alumnos "el respeto a las normas de convivencia dentro del centro docente"; precepto que, interpretado a la luz del derecho fundamental en juego, obliga a que, cuando un centro estime que el incumplimiento de dicha obligación sea merecedor de la expulsión del alumno, tal decisión deba adoptarse tras dar previamente audiencia a sus padres en cuanto representantes del mismo. En el presente caso, sin embargo, el Colegio resolvió separar definitivamente de su enseñanza y formación al alumno, sin satisfacer esa elemental obligación.

Por todo lo expuesto, se solicita el restablecimiento de los recurrentes en la integridad de los derechos garantizados en el art. 27.1 y 3 CE, obligando al centro a la readmisión del alumno y al pago de los daños y perjuicios que se fijen en ejecución, y, subsidiariamente, que se aprecie la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, debiendo la Sala Primera del Tribunal Supremo admitir el recurso de casación.

4. La Sección Cuarta, mediante providencia de 26 de junio de 1996, acordó conceder a la parte demandante de amparo y del Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que alegasen lo que estimasen pertinente, en relación con la posible existencia de la causa de inadmisión contemplada en el art. 50.1. 1 c) LOTC, consistente en la carencia manifiesta de contenido que justifique una decisión en forma de sentencia.

5. El Ministerio Fiscal emitió su informe mediante escrito que se registró

en este Tribunal el 9 de julio de 1996, interesando la inadmisión del recurso de amparo por carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda.

El Ministerio Fiscal comienza precisando que, aunque la demanda sólo se dirige contra el auto del Tribunal Supremo, dado su sentido confirmatorio de los argumentos y fallos de las sucesivas resoluciones, han de entender recurridas todas ellas. Dicho lo anterior rechaza la alegada vulneración del art. 24.1 CE, pues, a su juicio, el auto del Tribunal Supremo aborda las diversas cuestiones planteadas en el recurso de casación resolviéndolas de un modo razonable, ya directamente, ya asumiendo los fundamentos de las instancias —en lo relativo a la incompetencia de la jurisdicción civil para toda la temática relativa a la expulsión del centro docente—; motivación, esta última por remisión, que es aceptada plenamente por la jurisprudencia constitucional (AATC 545/1988 y 256/1994).

Tampoco aprecia vulneración alguna del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. En lo concerniente a las irregularidades cometidas en el expediente sancionador, que no pueden ser objeto de contraste definitivo en el proceso civil, las resoluciones impugnadas ofrecen una versión de los hechos completamente dispar a la sostenida en la demanda, toda vez que apuntan que se respetaron las garantías relativas al derecho de audiencia al menor, practicándose además prueba confirmatoria de la conducta sancionada. Y, por otro lado, son asimismo de recibo las afirmaciones que se hacen en la sentencia de instancia sobre el derecho fundamental implicado, ya que por la expulsión de un centro no se limita el derecho a recibir una educación determinada, pues ésta puede recabarse en cualquier otro centro de la misma orientación.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. Examinadas las alegaciones formuladas por los recurrentes y el Ministerio Fiscal en el trámite de admisión, procede apreciar la concurrencia en el presente caso de la causa de inadmisión del art. 50.1 c) LOTC, de la que fueron advertidas las partes por providencia de 26 de junio de 1996. En efecto, la demanda carece, manifiestamente, de contenido constitucional que justifique una decisión sobre el fondo de la misma por parte de este Tribunal.

2. Debe, en primer término, rechazarse la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva pretendidamente cometida por el auto del Tribunal Supremo. Frente a lo que se sostiene en la demanda, basta la sola lectura de la resolución para constatar de inmediato que la misma en absoluto adolece de la manifiesta irrazonabilidad o arbitrariedad requeridas para entender infringido el derecho que garantiza el art. 24.1 CE. Antes al contrario, como apunta el Ministerio Fiscal, en el auto se argumenta razonadamente la decisión de inadmitir el recurso de casación por carecer manifiestamente de fundamento. En puridad, bajo la invocación de este derecho, no se oculta

sino la mera discrepancia de los recurrentes acerca del mayor o menor grado de acierto de la decisión adoptada; cuestión esta de estricta legalidad ordinaria que, como tantas veces hemos repetido, resulta ajena a la vía de amparo constitucional.

3. Se alega a continuación la lesión del derecho a la educación que a todos garantiza el art. 27.1 CE, así como la vulneración del derecho “que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (art. 27.3 CE). Infracciones ambas que se imputan al hecho de que el “Colegio los Robles”, centro privado no concertado, acordase la expulsión del alumno, pues con esta sola decisión, de una parte, se privó a éste de su derecho a la educación y, al tiempo, se menoscabó la facultad que a sus padres confiere el art. 27.3 CE, habida cuenta de que en dicho centro se impartía una docencia conforme a sus convicciones.

Vuelve, pues, una vez más, a plantearse ante nosotros una pretendida conculcación de derechos fundamentales suscitada originariamente en el seno de las relaciones entre particulares; circunstancia que, naturalmente, no impide en modo alguno el examen de la pretensión actora, por más que la Constitución a efectos de su garantía no contemple expresamente la vinculación directa de los ciudadanos a los derechos y libertades (art. 53.1 CE), y que, en consonancia con ello, sólo quepa la interposición del recurso de amparo frente a la actuación de los poderes públicos (art. 41.2 LOTC). Cabe recordar, a este respecto, que los derechos fundamentales, si bien continúan concibiéndose primordialmente como derechos subjetivos de defensa frente al Estado, presentan además una dimensión objetiva, en virtud de la cual operan, como componentes estructurales básicos, que han de informar el entero ordenamiento jurídico. Como consecuencia de este “doble carácter de los derechos fundamentales (STC 25/1981, fundamento jurídico 5), pende sobre los poderes públicos una vinculación también dual: en su tradicional dimensión subjetiva, les impone la obligación negativa de no lesionar la esfera de libertad por ellos acotada; en su vertiente jurídico-objetiva, reclama genéricamente de ellos que, en el ámbito de sus respectivas funciones, coadyuven a fin de que la implantación y disfrute de los derechos fundamentales sean reales y efectivos, sea cual fuere el sector del ordenamiento en el que los mismos resulten concernidos (SSTC 53/1985), fundamento jurídico 4, y 129/1989, fundamento jurídico 3. Tal es, ciertamente, la comprensión de los derechos fundamentales que se infiere de un texto constitucional que, tras proclamar el Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 Cc), y, por ende, comprometer a los poderes públicos en la promoción de la libertad y la igualdad del individuo (art. 9.2 CE), eleva el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a los derechos de los demás a la condición de fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE).

Y aunque este deber de protección de los derechos fundamentales se proyecta en primer término y señaladamente sobre el legislativo, ya que, al recibir de ellos “impulsos y líneas directivas” encauzadores de su actividad legiferante (STC 53/1985, fundamento jurídico 4), ha de encargarse de conformar

ab initio todos los sectores del ordenamiento en consonancia con los mismos, no cabe infravalorar el alcance de esta obligación cuando se impone a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional exclusiva (art. 117.3 CE). De hecho, constitucionalmente se subraya su relevancia desde el momento en que el art. 53.2 CE explicita el deber específico de tutela de los derechos fundamentales que incumbe a los Jueces y Tribunales ordinarios. Consiguientemente, respecto de las relaciones entre particulares, y a los efectos del amparo constitucional, únicamente podrá estimarse vulnerado el derecho fundamental en liza cuando se constate que los órganos judiciales han incumplido o satisfecho indebidamente el tan reiterado deber de protección. Sólo así, en verdad, resulta en estos supuestos transitible esa vía del amparo constitucional, toda vez que la Ley Orgánica de este Tribunal exige que la lesión del derecho tenga "su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial" art. 44.1). En definitiva, lo que se recurre en amparo y, en consecuencia, lo que debe ser objeto de control no es, genuinamente, sino la falta de tutela de los derechos fundamentales por parte de las resoluciones judiciales impugnadas (por todas, SSTC 47/1985, fundamento jurídico 5; 88/1985 fundamento jurídico 4; 6/1988, fundamento jurídico 1; y 231/1988, fundamento jurídico 1).

Siendo ésta la forma en que se canalizan ante este Tribunal los casos de derechos fundamentales generados en las relaciones entre particulares, resulta imprescindible precisar en qué consiste dicho deber de protección a fin de calibrar los límites y posibilidades de la jurisdicción de amparo constitucional en estos supuestos. Pues bien, en una primera aproximación a la cuestión es dable sostener que tal obligación se traduce respecto de los órganos judiciales en la exigencia de que interpreten y apliquen la legalidad ordinaria de conformidad con los derechos fundamentales, los cuales, por lo tanto, deben ser necesariamente tomados en consideración de un modo adecuado al resolverse la controversia entre particulares. No puede, en efecto, pasarles desapercibido que entre la norma que consagra el derecho fundamental y la que, directa o mediatamente, afecta, condicionándolo, el ejercicio del mismo en las relaciones *inter privatos* existe una influencia recíproca, en virtud de la cual los órganos judiciales, lejos de optar por la aplicación mecánica de la norma limitadora deben partir de una apropiada apreciación del derecho fundamental para determinar la concreta intensidad de la restricción que de la legalidad ordinaria deriva. Y es que, ciertamente, como ya hemos con reiteración apuntado, de resultas de "esta interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre el mismo" (SSTC 159/1986, fundamento jurídico 6; 254/1988, fundamento jurídico 3 y 20/1990, fundamento jurídico 4 d).

No se trata, por consiguiente, en esta sede, de revisar cualesquiera errores en que los órganos judiciales puedan incurrir al aplicar la legalidad ordinaria, dado que el amparo constitucional no se configura como una última instancia ni cumple una función casacional, sino, más propiamente, de enjuiciar si, al acometer dicha tarea, han valorado convenientemente el alcance y la eficacia

de los derechos involucrados en el caso. Pues, de acuerdo con la recién aludida interacción, cuando se proceda a la interpretación de cualquier ámbito del derecho, ha de partirse del entendimiento de que, más allá del tenor literal de las normas que lo integran, el mismo se halla materialmente conformado por los derechos fundamentales.

A los Jueces y Tribunales ordinarios corresponde, sin embargo, en línea de principio, un cierto margen de apreciación a este respecto (SSTC 120/1983, fundamentos jurídicos 3 y 4; y 41/1984, fundamento jurídico 2), puesto que, como es palmario, el deber de protección dimanante del contenido objetivo de los derechos fundamentales no presenta unos perfiles tan nítidos como para entender que el mismo únicamente pueda ser satisfecho, en cada caso, por una sola fórmula correcta de resolución de las específicas controversias. Por el contrario, a menudo, es posible cumplir de diversos modos con dicha obligación, todos ellos conformes a la Constitución, sin que este Tribunal, en tales supuestos, pueda desplazar la decisión del órgano judicial por la suya propia sobre la única base de estimar que es dable una más adecuada valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Antes bien, la función revisora de este Tribunal ha de concentrarse en los errores que, habiendo sido relevantes para fundamentar la decisión impugnada, se basan en una incorrecta concepción del derecho fundamental en juego, y señaladamente en aquellos que se asientan en una equivocada delimitación de su ámbito constitucionalmente protegido. Sobre esta premisa, el concreto alcance del control que cabe efectuar en la vía de amparo dependerá de la intensidad de la afectación que ocasione en el derecho fundamental la resolución recurrida. Pues cuanto más penetrante sea su incidencia en la esfera de libertad por el derecho delimitada, un mayor grado de fundamentación resultará exigible a la decisión judicial, ampliándose, de este modo, paralelamente, las posibilidades revisoras del Tribunal Constitucional.

4. Según se desprende de la demanda, la denunciada vulneración de los derechos consagrados en los arts. 27.1 y 3 CE se habría producido porque el auto impugnado del Tribunal Supremo —que vino a confirmar las sentencias recaídas en primera instancia y en apelación; razón por la cual ha de entenderse que el recurso también se extiende a ellas— no reconoció que la previa audiencia a los padres es un requisito imprescindible para acordar una sanción tan grave como la expulsión. Exigencia esta que, al no ser satisfecha por el “Colegio los Robles”, habría menoscabado el derecho a la libre elección del centro.

Esta alegación no resulta lo suficientemente persuasiva.

En principio, ciertamente, no hay dificultad alguna en admitir que el derecho de todos a la educación, en cuanto derecho de libertad (STC 86/1985, fundamento jurídico 3), comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo prima facie la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos. Y ello no sólo porque así lo prevea el art. 4 b) de la LO 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación (en adelante, LODE), sino porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al interpretar el alcance del

primer inciso del art. 2 del Protocolo núm. 1 ("A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción"). ha reconocido taxativamente que este derecho se garantiza igualmente tanto a los alumnos de las escuelas públicas como a los de las privadas, sin establecer distinción alguna entre ellos (Sentencia Castello-Roberts *v.* el Reino Unido, de 25 de marzo de 1993, 27). Protocolo que, de acuerdo con el art. 10.2, al haber sido ratificado por España, puede servir de fuente interpretativa para delimitar el contenido constitucionalmente protegido de los derechos que se pretenden tutelar en amparo (por todas, STC 64/1991, fundamento jurídico 4). Así, pues, bajo el ámbito de cobertura del art. 27.1 CE cabe ubicar la capacidad de optar entre los diversos centros existentes, sean públicos o privados, aunque, naturalmente, el acceso efectivo al elegido dependerá de si se satisfacen o no los requisitos establecidos en el procedimiento de admisión de alumnos, para cuya fijación los centros privados no concertados gozan de autonomía (art. 25 LODE). Por lo demás, este Tribunal ya ha revelado la relación estrecha que media entre la facultad de escoger centro docente y el derecho consagrado en el art. 27.3 CE, puesto que el ejercicio de aquélla constituye "un modo de elegir una determinada formación religiosa y moral" (STC 5/1981, fundamento jurídico 8).

Este derecho de acceder al centro escolar elegido encuentra, obviamente, un imprescindible correlato en la facultad de proseguir la instrucción en el mismo, de tal modo que la expulsión de la escuela, en determinadas circunstancias, puede entrañar la vulneración del derecho a la educación. Así, lo reconoce el TEDH (Sentencia Campbell y Cosans, de 25 de febrero de 1982, párrs. 39-41) e, igualmente, también nosotros hemos tenido ya ocasión de advertirlo. Como apuntamos en la STC 5/1981 refiriéndonos expresamente al derecho fundamental que todos los ciudadanos tienen a la educación (art. 27.1 CE): "De nada serviría reconocer este derecho en el texto constitucional si luego fuese posible sancionar arbitrariamente a los alumnos dentro de los centros por supuestas faltas de disciplina cuya consecuencia última pudiera ser la expulsión del centro; con ello se imposibilitaría o al menos se dificultaría el ejercicio real de este derecho fundamental" (fundamento jurídico 28).

Nada obsta, sin embargo, como sucede con la generalidad de los centros fundamentales, a que esta faceta del derecho a la educación pueda ser lícitamente limitada a fin de salvaguardar otros derechos o bienes de naturaleza constitucional. De ahí que el legislador orgánico, al objeto de tutelar el pacífico disfrute del derecho a la instrucción del conjunto del alumnado, haya establecido como un deber básico del discente, además del estudio, "el respeto a las normas de convivencia dentro del centro docente" (art. 6.2 LODE); normas cuyo establecimiento se confía a la autonomía de los centros privados no concertados (art. 25 LODE). El incumplimiento de las normas de convivencia puede, por consiguiente, justificar suficientemente la expulsión de la escuela, sin que ello suponga en modo alguno la vulneración del derecho fundamental. Sólo, en suma, en los supuestos en que la sanción se haya impuesto arbitrariamente cabría plantearse la hipotética lesión del derecho en cuestión.

Pues bien, el análisis de las resoluciones objeto de este proceso revela ine-

quívocamente que los órganos judiciales satisficieron el deber de protección de los derechos involucrados, puesto que, como veremos a continuación, en modo alguno desconocieron o concibieron erróneamente su alcance constitucional. De una parte, y ciñéndonos —por ser suficiente— a aquellos aspectos que más directamente conciernen a la queja planteada, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, núm. 5, de Oviedo, aun cuando señaló que la parte actora, en lugar de aquietarse frente a la sanción, debió haberla recurrido en su día en la vía administrativa (art. 31 del Real Decreto 1543/1988, regulador de los derechos y deberes de los alumnos), no dejó por ello de examinar, bajo el prisma de los derechos fundamentales, su pretendida irregularidad cuando abordó el posible incumplimiento de las obligaciones de la entidad demandada al resolver el contrato de arrendamiento de servicios. Y el referido Juzgado, una vez constatado que existió una base razonable para que el centro adoptase la sanción de expulsión, y que, además, se cumplieron los requisitos mínimos exigidos para su imposición por el Real Decreto 1543/1988 —instrucción de expediente, nombramiento de instructores, audiencia del menor, práctica de pruebas...— (fundamento jurídico 3) no pudo sino concluir desestimando íntegramente la demanda. Existencia de un fundamento constitucional razonable justificador de la expulsión que, por lo demás, sería con mayor amplitud argumentada en la sentencia de la Audiencia Provincial, que insistiría en que la sanción obedeció al incumplimiento por parte del alumno del deber de respetar las normas de convivencia del centro, ignorando así que su derecho a la educación debía compatibilizarse con el derecho al estudio de sus compañeros (fundamento jurídico 2).

Por lo tanto, ni los órganos judiciales apreciaron que se incurriera en arbitrariedad al imponerse la sanción, ni los demandantes se quejan de ello, sino únicamente de que no se les dio audiencia antes de acordarse la expulsión. El derecho fundamental a la educación, empero, como señalamos líneas arriba, aunque en principio ofrece cierta protección frente a las expulsiones arbitrarias, en modo alguno exige el respeto escrupuloso de todas y cada una de las garantías procedimentales que sobre el particular puedan pergeñarse; razón por la cual no incumbe a este Tribunal, sino exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, determinar si el Real Decreto 1543/1988 impone o no la audiencia previa a los padres y, en su caso, velar por su cumplimiento. En definitiva, los órganos judiciales no soslayaron su deber de protección de los derechos fundamentales en juego, ya que, en sus decisiones, ni los ignoraron ni asumieron una interpretación errónea de su ámbito constitucionalmente protegido, por lo que en absoluto puede estimarse que los mismos resultaran lesionados.

Por todo lo expuesto la Sección,

ACUERDA

la inadmisión del presente recurso de amparo y el archivo de las actuaciones.

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS

(Nueva Época)

Director: PEDRO DE VEGA GARCÍA
Secretario: JUAN J. SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA

Sumario del número 98 (Octubre-Diciembre 1997)

ESTUDIOS

- Antonio-Enrique Pérez Luño: *Los principios generales del derecho: ¿un mito jurídico?*
Joan Oliver Araujo: *El consejo de Estado y los órganos consultivos de las Comunidades Autónomas.*
María Elosegui Itxaso: *La inclusión del otro. Habermas y Rawls ante las sociedades multi-culturales.*
Fernando Reinares: *Organizaciones subversivas y militancia política.*
Laura Román Masedo: *Política y administración. Algunas notas sobre el origen y la evolución del debate teórico.*
César Aguado Renedo: *El principio dispositivo y su virtualidad actual en relación con la estructura territorial del Estado.*

NOTAS

- Dieter Nohlen: *El estado de la investigación sobre sistemas electorales.*
Holm-Detlev Köhler: *El nacionalismo: un pasado ambiguo y un futuro sangriento.*
HCF Mansilla: *Las insuficiencias del marxismo crítico y los problemas del mundo contemporáneo.*
Luis E. Delgado del Rincón: *La configuración de la Administración de Justicia como parte de la Administración Pública durante el siglo XIX español.*
Héctor López Bofill: *Notas sobre la experiencia federal en Argentina.*

CRÓNICAS Y DOCUMENTACIÓN

- Geoffrey K. Roberts: *Sistema de partidos y Parlamento en Gran Bretaña: 1996.*
Pablo Oñate: *Ingeniería electoral y resolución de conflictos. El caso de Bosnia-Herzegovina.*

RECENSIONES. NOTICIAS DE LIBROS

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España.....	6.000 Ptas.
Extranjero.....	8.500 Ptas.
Número suelto: España.....	1.600 Ptas.
Número suelto: Extranjero.....	2.500 Ptas.

Suscripciones y números sueltos
CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Fuencarral, 45, 6.ª
28004 MADRID

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Plaza de la Marina Española, 9
28071 MADRID

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Director: FRANCISCO RUBIO LLORENTE
Secretario: JUAN LUIS REQUEJO PAGES

Sumario del año 17, número 51 (Septiembre-Diciembre 1997)

ESTUDIOS

- Reiner Wahl y Joachin Wieland: *La Jurisdicción Constitucional como bien escaso. El acceso al Bundesverfassungsgericht.*
- Angel Garrorena Morales: *Cuatro tesis y un corolario sobre el Derecho Constitucional.*
- José Bermejo Vera: *Derechos fundamentales, información y deporte.*
- Juan F. López Aguilar: *Los problemas Constitucionales del sistema electoral autonómico canario.*
- Luis García Ruiz y Emilia Girón Reguera: *La incidencia del modelo de Estado en el sistema de financiación autonómica.*
- Florentino Ruiz Ruiz: *La función de garantía del cumplimiento autonómico del Derecho Comunitario Europeo.*

NOTAS

- José M.ª Areñza Carvajal y Emilia Girón Reguera: *La nueva interpretación del artículo 30 del Tratado CE: limitación de competencias por la puerta de atrás.*

JURISPRUDENCIA

- Actividad del Tribunal Constitucional: Relación de sentencias dictadas durante el segundo cuatrimestre 1997 (Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid).
- La doctrina del Tribunal Constitucional durante el segundo cuatrimestre de 1997.
- Estudios Críticos.
- Javier Pardo Falcón: *A vueltas con el art. 15 CE y otras cuestiones más o menos recurrentes de nuestro Derecho Constitucional (un comentario a la STC 212/1996, de 19 de diciembre).*
- Enrique García Pons: *Aporía del principio pro actione en el ámbito temporal del proceso debido: comentario a la STC 136/97.*

CRÍTICA DE LIBROS

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

- Noticias de Libros.
- Revista de Revistas.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España	5.500 Ptas.
Extranjero.....	7.900 Ptas.
Número suelto: España	2.000 Ptas.
Número suelto: Extranjero.....	2.600 ptas.

Suscripciones y números sueltos
CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Fuencarral, 45, 6.ª - 28004 MADRID

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Director: EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA
Secretaría: CARMEN CHINCHILLA MARIN

Sumario del número 144 (Septiembre-Diciembre 1997)

ESTUDIOS

- Sebastián Martín-Retortillo Baquer: *Reflexiones sobre las privatizaciones.*
José Luis Martínez López-Muñiz: *Sociedades públicas para construir y contratar obras públicas.*
Silvia del Saz Cordero: *Las oposiciones a cátedras.*
Ernesto García-Trevijano Garnica: *El régimen jurídico de las costas españolas: la concurrencia de competencias sobre el litoral. Especial referencia al informe preceptivo y vinculante de la Administración del Estado.*
José M.ª Gimeno Feliú: *Una valoración crítica sobre el procedimiento y contenido de las últimas reformas legales en contratación pública.*

JURISPRUDENCIA

I. COMENTARIOS MONOGRÁFICOS

- M.ª J. Alonso Más: *La fiscalización jurisdiccional de las pruebas tipo test para el acceso a la función pública.*
I. Barriobero Martínez: *La sobreexplotación grave de los acuíferos. Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo, de 30 de enero y de 14 de mayo de 1996.*
A. Fayos Gardo: *El nuevo mercado de las ideas. (Sobre la Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano del caso Internet).*
A. B. Gómez Díaz: *La eficacia de las sentencias contencioso-administrativas: entre la dogmática y la ingeniería judicial.*

II. NOTAS

Contencioso-administrativo

- A) *En general* (T. Font i Llovet y J. Tornos Más).
B) *Personal* (R. Entrena Cuesta).

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS Y DICTÁMENES

BIBLIOGRAFÍA

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España.....	6.000 Ptas.
Extranjero.....	8.500 Ptas.
Número suelto: España.....	2.100 Ptas.
Número suelto: Extranjero.....	3.000 Ptas.

Suscripciones y números sueltos
CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
Fuencarral, 45, 6.ª - 28004 MADRID

CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

Plaza de la Marina Española, 9
28071 MADRID

REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO

Directores:

MANUEL DIEZ DE VELASCO - GIL, CARLOS RODRÍGUEZ IGLESIAS Y ARACELI MANGAS MARTÍN

Directora ejecutiva: ARACELI MANGAS MARTÍN

Secretaría: NILA TORRES UGENA

Sumario del volumen 1, número 1 (Enero-Junio 1997)

ESTUDIOS

- Alfonso Dastis Quecedo y José M.^a Areñza Carvajal: *Flexibilidad y cooperaciones reforzadas: ¿Nuevos métodos para una Europa nueva?*
- Ricardo Gosalbo Bono: *Reflexiones en torno al futuro de la protección de los derechos humanos en el marco del Derecho comunitario y del Derecho de la Unión: insuficiencias y soluciones.*
- Enrique González Sánchez: *El diálogo político de la Unión Europea con países terceros.*

NOTAS

- Peter Dyrberg: *La Constitución danesa y la Unión Europea (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo danés, de 12 de agosto de 1996).*
- Diego J. Liñán Noguera y Margarita Robles Canillas: *Crónica sobre la aplicación judicial del Derecho Comunitario en España (1993-1994-1995).*
- Antonio Fernández Tomás: *Libre circulación de capitales, control de cambios y delitos monetarios: la solución a unas discrepancias entre el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal Supremo Español.*
- Andrés Olesti Rayo: *Algunas cuestiones sobre la adopción de sanciones económicas por la Comunidad Europea contra la República Federal de Yugoslavia (Comentario a las Sentencias del TJCE, de 30 de julio de 1996, "Bosphorus", C-84/95, y de 14 de enero de 1997, "Centro-Com", C-124/95).*
- José Martín y Pérez de Nanclares: *La televisión digital y el Derecho comunitario europeo: reflexiones en torno a una polémica transposición.*
- Carmen Otero García-Castrillón: *La circulación intracomunitaria de productos farmacéuticos con especial referencia a los precedentes de España y Portugal (Comentario a la Sentencia del TJCE, de 5 de diciembre de 1996, "Merck y otros y Promecrown y Beecham Group c. europfarm", as.ac. C-267/95 y C-268/95).*
- Carmen Pérez González: *Sobre la responsabilidad del Estado frente a los particulares por la no transposición de las directivas comunitarias (Comentario a la Sentencia del TJCE, de 8 de octubre de 1996, as.ac C-178/94, C-179/94, C-189/94 y C-190/94, "Dillenkofer y otros").*
- José Javier Pérez Milla: *La dimensión comunitaria en el proceso laboral: cooperación internacional y traducción de prueba documental (Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional español 45/96, de 25 de marzo).*
- Igorne Urtizberea Sein: *Cooperación policial y derecho de persecución a la luz de un asunto en la frontera hispano-francesa.*

BIBLIOGRAFÍA

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España.....	2.000 Ptas.
Extranjero.....	3.000 ptas.
Número suelto: España.....	3.900 Ptas.
Número suelto: Extranjero.....	5.900 Ptas.

Suscripciones y números sueltos

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Fuencarral, 45, 6.^a - 28004 MADRID

REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO

Directores:

MANUEL DíEZ DE VELASCO - GIL, CARLOS RODRÍGUEZ IGLESIAS Y ARACELI MANGAS MARTÍN

Directora ejecutiva: ARACELI MANGAS MARTÍN

Secretaría: NILA TORRES UGENA

Sumario del volumen 1, número 2 (Julio-Diciembre 1997)

ESTUDIOS

Gil Carlos Rodríguez Iglesias y A. Valle Gálvez: *El derecho comunitario entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales.*

Peter Dyrberg: *El acceso público a los documentos y las Autoridades comunitarias.*

Pedro de Miguel Asensio: *Integración europea y Derecho Internacional Privado.*

M.^a Isabel García Catalán: *Las medidas de salvaguardia y las restricciones voluntarias a la exportación en el marco del GATT/OMC y de la Unión.*

Joaquín Roy: *La Ley Helms-Burton: desarrollo y consecuencias.*

Luis Miguel Hinojosa: *Reflexiones en torno al concepto de discriminación: los obstáculos fiscales a la libre circulación de personas en la CE.*

NOTAS

Javier Roldán Barbero y Luis Miguel Hinojosa: *La aplicación judicial del Derecho Comunitario en España (1996).*

Carmen López Jurado: *La controversia entre la Unión Europea y Estados Unidos relativa a la Ley Helms-Burton.*

Lidia Moreno Blesa: *La liberación del sector eléctrico en la Comunidad Europea: el caso Rendo y su proyección en España (Comentario a las Sentencias del TPI y del TJCE, de 18 de noviembre de 1992, de 19 de octubre de 1995 y de 12 de diciembre de 1996, asunto Rendo y otros c. Comisión de las Comunidades Europeas).*

M.^a Amparo Alcoceba Gallego: *Entre la irreversibilidad jurídica y la reversibilidad política: la negativa sueca a entrar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria.*

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

BIBLIOGRAFÍA

REVISTA DE REVISTAS

DOCUMENTACIÓN

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

España.....	3.900 Ptas.
Extranjero.....	5.900 ptas.
Número suelto: España.....	2.000 Ptas.
Número suelto: Extranjero.....	3.000 Ptas.

Suscripciones y números sueltos

CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES

Fuencarral, 45, 6.^ª - 28004 MADRID

REVISTA DE LAS CORTES GENERALES

CONSEJO DE REDACCIÓN

Presidentes:

FÉLIX PONS IRAZAZÁBAL • JUAN JOSÉ LABORDA MARTÍN

Presidente de Honor: GREGORIO PECES-BARBA MARTÍNEZ

JUAN MUÑOZ GARCÍA, BERNARDO BAYONA AZNAR, FEDERICO TRILLO FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE, CLEMENTE SANZ BLANCO, JOAN MARCET I MORERA, MANUEL AGUILAR BELDA, FRANCISCO RUBIO LLORENTE, MARTÍN BASSOLS COMA, JOSÉ M. BELTRÁN DE HEREDIA, JOSÉ LUIS CASCAJO DE CASTRO, ELÍAS DÍAZ, JORGE DE ESTEBAN ALONSO, EUSEBIO FERNÁNDEZ, FERNANDO GARRIDO FALLA, ANTONIO PÉREZ LUÑO, FERNANDO SAINZ DE BUJANDA, JUAN ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR, JORDI SOLÉ TURA, MANUEL FRAILE CLIVILLÉS, PABLO PÉREZ JIMÉNEZ, EMILIO RECORDER DE CASSO, FERNANDO SANTAOLALLA LÓPEZ, FERNANDO SAINZ MORENO, MARÍA ROSA RIPOLLÉS SERRANO, MANUEL GONZALO GONZÁLEZ Y MIGUEL MARTÍNEZ CUADRADO.

Director: IGNACIO ASTARLOA HUARTE-MENDICOA

Subdirector: MANUEL ALBA NAVARRO

Sumario del número 39 (tercer cuatrimestre 1996)

I. ESTUDIOS

El Juez-funcionario y sus presupuestos: el nacimiento del juez ordinario reclutado por oposición (el art. 94 de la Constitución de 1869 y el sistema de la LOPJ de 1870).

MANUEL MARTÍNEZ SOSPEDRA

El régimen jurídico de los anticipos de tesorería y el poder presupuestario de las Cortes Generales.

AMABLE CORCUERA TORRES

¿Derechos fundamentales o derechos fundamentados?

JAVIER SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Tres casos difíciles en la fase del Senado del procedimiento legislativo.

ELVIRO ARANDA ÁLVAREZ

II. NOTAS Y DICTÁMENES

Aproximación a la Constitución colombiana de 1991.

ENRIQUE BELDA PÉREZ-PEDRERO

La disciplina de partido en los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

MANUEL SÁNCHEZ DE DIOS

La admisión a trámite en las cuestiones de inconstitucionalidad.

MAGDALENA GONZÁLEZ JIMÉNEZ

III. CRÓNICA PARLAMENTARIA

Crónica parlamentaria de la IV Legislatura en el Congreso de los Diputados.

LIDIA GARCÍA FERNÁNDEZ

IV. DOCUMENTACIÓN

LIBROS

REVISTA DE REVISTAS

SECRETARÍA GENERAL DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

(Servicio de Publicaciones)

Carrera de San Jerónimo, s/n.

28071 MADRID

DEFENSOR DEL PUEBLO

PUBLICACIONES

Informe anual

Balance de la actuación del Defensor del Pueblo. Su presentación ante las Cortes Generales es preceptiva y proporciona una visión de conjunto de las relaciones de la Administración pública con el ciudadano.

Informe anual 1994: 3 vols. (10.500 ptas.).

Informe anual 1995: 2 vols. (6.000 ptas.).

Recomendaciones y sugerencias

Reúne, anualmente desde 1983, las resoluciones en las que se indica a la Administración pública o al órgano legislativo competente, la conveniencia de dictar o modificar una norma legal, o de adoptar nuevas medidas de carácter general.

1994 (2.500 ptas.).

1995 (en prensa).

Informes, Estudios y Documentos

Se trata de documentos de trabajo, elaborados con motivo de la actuación del Defensor del Pueblo, en los que de forma monográfica se analizan algunos problemas de la sociedad española y la respuesta de las Administraciones públicas.

“Residencias públicas y privadas de la tercera edad” (1.600 ptas.).

“Menores” (agotado).

“Situación jurídica y asistencial del enfermo mental en España” (agotado).

“Situación jurídica y asistencial de los extranjeros en España” (1.700 ptas.).

“Atención residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos” (2.850 ptas.)

Recursos ante el Tribunal Constitucional

1983-1987 (2.600 ptas.).

1988-1992 (1.400 ptas.).

Fuera de colección

“VIII Jornadas de Coordinación entre Defensores del Pueblo” (Monográfico sobre la situación de las personas de edad avanzada y la del menor) (800 ptas.).

“Régimen Jurídico del Defensor del Pueblo” (3.100 ptas.)

Distribuye:

LA LIBRERÍA DEL BOE

C/ Trafalgar, 29 - 28071 MADRID - Tel.: 538 22 95

DOR, S.L.

Camino de Hormigueras, 124 - 28031 MADRID - Tel.: 380 28 75

REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Consejo de redacción: A. CAYON GALIARDO, J. DIAZ FERNANDEZ, A. EMBID IRUJO, A. FANLO-LORAS,
M. GIMÉNEZ ABAD, I. MURILLO GARCIA-ATANCE, M. RAMIREZ JIMÉNEZ, L. ROLDAN ALEGRE,
R. SALANOVA ALCALDE Y R. SANTACRUZ BLANCO

Director: F. LOPEZ RAMON. Secretario: L. A. POMED SANCHEZ

Sumario del número 10 (Junio 1997)

ESTUDIOS

- A. PÉREZ MORENO: *La cuestión medioambiental, factor prioritario en la regulación de las obras y servicios públicos.*
- M. CONTRERAS CASADO: *Memoria del proceso autonómico. La Reforma del Estatuto aragonés en el contexto político y parlamentario del desarrollo de la autonomía.*
- A. FANLO LORAS: *La articulación de las competencias de las Comunidades Autónomas en la gestión del agua.*
- F. GURREA CASAMAYOR: *Políticas retributivas universitarias: complementos del profesorado.*

DEBATES

- V. BIELZA DE ORY Y R. DE MIGUEL GONZÁLEZ: *El patrimonio cultural, componente de la ordenación del territorio.*
- A. EMBID IRUJO: *La utilización racional de las aguas y los abastecimientos urbanos. Algunas reflexiones.*
- T. QUINTANA LÓPEZ: *La reorganización de las Administraciones públicas. La Administración periférica estatal.*
- J. RODRÍGUEZ ARANA: *Sobre el origen de la ciencia administrativa en España.*
- A. AGUIRRE PARDILLOS: *Supresión de la distinción entre suelo urbanizable programado y suelo urbanizable no programado.*

JURISPRUDENCIA

- N. DE MIGUEL SÁNCHEZ: *Evolución de la responsabilidad patrimonial de la Administración hacia nuevas posiciones: la responsabilidad interadministrativa y la responsabilidad del Estado legislador.*
- J. C. TEJEDOR BIELSA: *El Derecho urbanístico y la Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997.*
- E. MOREU CARBONELL: *El sistema normativo de la Segunda República durante la Guerra Civil española: un conflicto sorprendente en el ámbito concesional minero.*
- A. EZQUERRA HUERVA: *Principio de unidad de cuenca y competencias autonómicas en materia de aguas (STC 161/1996, de 17 de octubre).*
- F. GONZÁLEZ BOTIJA: *La ruina inminente: su tratamiento en la jurisprudencia reciente.*

PRACTICA. DERECHO COMPARADO. CRONICAS. BIBLIOGRAFIA

•
PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

Precio de la suscripción anual..... 3.500 Ptas. + IVA
Número suelto..... 2.000 Ptas. + IVA

•

Suscripciones:

Instituto Aragonés de Administración Pública

Paseo María Agustín, 36 - 50004 Zaragoza

REVISTA DE DERECHO CIVIL ARAGONES

Director: JESÚS DELGADO ECHEVERRÍA

INDICE 1997, III (Número 1)

ESTUDIOS

- MOREU BALLONGA, José Luis: *Aportación a la doctrina sobre la legítima aragonesa en contemplación de su futura reforma legal.*
- SÁNCHEZ-FRIERA GONZÁLEZ, Carmen: *Posible explicación a la antinomia existente entre las Observancias 1.ª y 5.ª De consortibus ejusdem rei.*
- BELLOD FERNÁNDEZ DE PALENCIA, Elena: *La corresponsividad del testamento mancomunado. Estado de la cuestión.*
- OLIVAN DEL CACHO, Javier: *El Derecho aragonés para D. Juan Moneva y Puyol. (Apostillas a su libro «Introducción al Derecho Hispánico en el cincuentenario del Congreso Nacional de Derecho Civil»).*

NOTAS Y CUESTIONES PRACTICAS

- BATALLA CARILLA, José Luis: *El derecho expectante de viudedad y la disposición de bienes inmuebles por los cónyuges. Desde las Observancias hasta hoy.*
- ROMERO HERRERO, Honorio: *Reflexiones sobre el nacimiento del consorcio foral aragonés por adquisición hereditaria.*

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

- LÓPEZ AZCONA, Aurora: *Breve noticia de la última Jurisprudencia sobre derecho de abolitorio.*
- SÁNCHEZ UNGRIA, M.ª José: *Comentario a la Sentencia de 29 de noviembre de 1996 de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.*

MATERIALES

NOTICIAS

BIBLIOGRAFIA

JURISPRUDENCIA

•

PRECIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL

Precio de la suscripción anual..... ±5.000 Ptas.
Número suelto ±2.500 Ptas.

(Los suscripciones tendrán un descuento del 25 por 100 sobre el precio de venta al público de cada volumen)

•

Suscripciones:

Institución "Fernando el Católico". DPZ

Plaza de España, 2 - 50071 Zaragoza

RDBB

REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSÁTIL

Dirigida por FERNANDO SANCHEZ CALERO

Núm. 67 julio-septiembre 1997

ARTÍCULOS

LUIS POMED SÁNCHEZ: Las potestades normativas del Banco de España tras la aprobación de su reglamento interno.

BELÉN RICO ARÉVALO: Los fondos de inversión garantizados: elementos jurídicos de configuración.

JUAN JOSÉ DÍEZ SÁNCHEZ: La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Análisis especial de las cartas-circulares de su presidente.

CRÓNICA

MARÍA JOSÉ ALONSO MÁS: La dirección de la política monetaria por el Banco de España.

MERCEDES FUERTES: El régimen jurídico de los préstamos celebrados por las Administraciones públicas: un retroceso hacia el mercado único europeo.

DOCUMENTOS

JESÚS ALFARO ÁGUILA-REAL: El proyecto de ley sobre condiciones generales de contratación: técnica legislativa, burocracia e intereses corporativos en el Derecho privado.

JURISPRUDENCIA

MANUEL JOSÉ VÁZQUEZ PENA: Causa de la orden de transferencia y cobro de lo indebido.

JUAN SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE: Contrato de cuenta corriente: cláusulas referidas a la aprobación del saldo y alcance probatorio de la aceptación por el cliente.

NOTICIAS

BIBLIOGRAFÍA

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN BANCARIA Y BURSÁTIL

Quintana, 2, 2.º - 28008 Madrid

Suscripciones y Distribución:

Edersa, Valverde, 32 - 28004 Madrid - Tel.: 521 05 39

Suscripción anual: España.....	14.450 Ptas.
Suscripción anual: Extranjero	14.900 Ptas.
Número suelto: España.....	3.080 Ptas.
Número suelto: Extranjero	3.300 Ptas.

REVISTA DE
Estudios Políticos

Publicación trimestral

REVISTA DE
**Derecho Comunitario
Europeo**

Publicación semestral

REVISTA DE
Administración Pública

Publicación cuatrimestral

REVISTA ESPAÑOLA DE
Derecho Constitucional

Publicación cuatrimestral

**Derecho Privado
y Constitución**

Publicación anual

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Plaza de la Marina Española, 9 - 28071 Madrid (España)



2.000 pesetas